

REPUBLICA DE PANAMA
GACETA OFICIAL
SEGUNDA EPOCA

AÑO XIII

PANAMÁ, 19 DE OCTUBRE DE 1916

NÚMERO 2453

PODER EJECUTIVO
Presidente de la República,
RAMON M. VALDES
Despacho Oficial: Residencia Presidencial.

Subsecretario de Gobierno y Justicia, encargado del Despacho,

HECTOR VALDES
Despacho Oficial: Palacio de Gobierno, segundo piso, Calle 3a.—Casa particular: Avenida Sur, No. 6.

Secretario de Relaciones Exteriores,
NARCISO GARAY

Despacho Oficial: Palacio de Gobierno, segundo piso, Avenida Central.—Casa particular: Calle 10 No. 10.

Secretario de Hacienda y Tesoro,
AURELIO GUARDIA

Despacho Oficial: Palacio de Gobierno, tercer piso, Avenida Central.—Casa particular: Calle 5a. No. 38.

Secretario de Instrucción Pública,
GUILLERMO ANDREVE

Despacho Oficial: Palacio de Correos y Telégrafos, segundo piso, Avenida Central, Plaza de la Independencia.—Casa particular: Calle 7a., No. 12.

Subsecretario de Fomento, encargado del Despacho,

RAMON L. VALLARINO
Despacho Oficial: Palacio de Gobierno, primer piso, Avenida Central.—Casa particular: Calle 3a. No. 6.

EDEVINA A. DE AROSEMENA
Editor Oficial
Oficina: Avenida Central, número 13.

PERMANENTE
Los documentos publicados en la "Gaceta Oficial" se considerarán oficialmente comunicados para los efectos legales y del servicio.
El Subsecretario de Gobierno y Justicia,
Héctor Valdés.

AVISO
En la Tesorería General de la República se aceptan suscripciones a la Gaceta Oficial sobre las siguientes bases de pago anticipado:
Por un año B. 6.00
Por seis meses 3.00
Por tres meses 1.50
El periódico se repartirá a domicilio a los suscriptores, el mismo día de salida.

En la misma Oficina y en las respectivas Administraciones Provinciales de Hacienda se encuentran de venta:

La Ley 1a. de 1909 "sobre reformas civiles y judiciales", a B. 0.25 el ejemplar.

El folleto que contiene en español e inglés la Ley 19 de 1907 sobre adjudicación de tierras baldías de la República, a B. 0.25 el ejemplar.

Las disposiciones vigentes sobre adjudicación y administración de tierras baldías e intituladas a B. 1.00 el ejemplar.

Los mapas descriptivos de las tierras tituladas en las márgenes del Río Chagres, a B. 0.75 cada ejemplar.
El Tesorero General de la República,
J. M. Alzamora.

AVISO
A razón de veinticinco centésimos de balboa, el ejemplar, se halla de venta en la Tesorería General de la República el folleto que contiene todas las disposiciones reglamentarias del Registro Público.
El Subsecretario de Gobierno y Justicia,
Héctor Valdés.

LEYES DE 1912 Y 1913
En la Tesorería General de la República se encuentra de venta la colección de las leyes expedidas por la Asamblea Nacional en sus sesiones de 1912 y 1913, al precio de un balboa (B. 1.00) el ejemplar.
El Tesorero General de la República,
J. M. Alzamora.

AVISO
En la Tesorería General de la República se vende el "Reglamento Marítimo para el Puerto de Panamá", a razón de veinticinco centésimos de balboa (B. 0.25) el ejemplar.
El Tesorero General de la República,
J. M. Alzamora.

CONTENIDO
PODER LEGISLATIVO

Páginas
Ley 7a. de 1916, de 19 de Octubre, por la cual se crea una Oficina de Seguridad. 6487

PODER EJECUTIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Decreto número 125, de 1916, de 10 de Agosto, por el cual se hace un nombramiento en la Secretaría de Gobierno y Justicia. 6487

Decreto número 126 de 1916, de 8 de Agosto, por el cual se hace un nombramiento en la Agencia Postal de la ciudad de Colón. 6487

Decreto número 127 de 1916, de 8 de Agosto, por el cual se hace una promoción y un nombramiento en la Oficina de Registro Público. 6488

Decreto número 128 de 1916, de 12 de Agosto, por el cual se hace un nombramiento en la Circunscripción de San Blas. 6488

Decreto número 129 de 1916, de 12 de Agosto, por el cual se fijan derechos para la explotación de bosques en la Circunscripción de San Blas y se reforman los Decretos números 68 y 185 de 1915. 6488

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el juicio so-

bre validez o nulidad del Acuerdo número 2, de 17 de Diciembre de 1915, dictado por el Consejo Municipal de Panamá. 6488-89

Avisos oficiales 6490

PODER LEGISLATIVO

LEY 7a. DE 1916
(de 19 de Octubre)
por la cual se crea una Oficina de Seguridad.

La Asamblea Nacional de Panamá,
Decreta:

Artículo 1o. Créase en la Capital de la República una oficina que se denominará Oficina de Seguridad, la cual tendrá a su cargo la vigilancia del tráfico comercial y el uso de sustancias y aparatos que puedan producir incendios o siniestros de otra especie, lo que hará de acuerdo con las disposiciones de esa ley, con las de los Códigos vigentes que no le sean contrarios y con los decretos que el Poder Ejecutivo dicte al respecto.

Artículo 2o. La Oficina de Seguridad estará a cargo de un empleado que llevará el título de Jefe, que designará un sueldo mensual de doscientos cincuenta balboas (B. 250.00) y será nombrado por la Junta de Oficiales del Cuerpo de Bomberos.

En la Oficina habrá un Portero Escribiente con un sueldo mensual de treinta y cinco balboas (B. 35.00), y será de libre nombramiento y remoción del Jefe de la Oficina de Seguridad. Estos sueldos serán pagados de la Caja de Auxilios del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Artículo 3o. Para ser Jefe de la Oficina de Seguridad se requiere ser jefe activo del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Artículo 4o. El Jefe de la Oficina de Seguridad es una autoridad de Policía en todo lo relacionado con siniestros o incendios y en el desempeño de sus deberes ejercerá las funciones de Jefe de Instrucción.

Artículo 5o. Es prohibido al Jefe de la Oficina de Seguridad tomar parte activa en las contiendas políticas y ejercer los cargos electorales que les están vedados a los Jueces de la República.

Artículo 6o. Para sufragar los gastos que ocasione la presente Ley y para fomentar la Caja de Auxilios del Cuerpo de Bomberos de Panamá se impone a las Agencias y Compañías de Seguros contra incendios, de transporte y de vida un gravamen de quinientos balboas (B. 500.00) mensuales, repartidos proporcionalmente entre ellas. La liquidación la hará una Junta compuesta de dos representantes de la Compañía y Agencias y uno del Cuerpo de Bomberos.

Parágrafo. Dichas Compañías y Agencias quedan exentas de todo impuesto Municipal.

Artículo 7o. El Poder Ejecutivo, por el órgano de la Secretaría de Gobierno, reglamentará esta ley por

medio de Decreto y señalará con precisión las funciones de los empleados que crea dicha ley.

Parágrafo. Esta reglamentación se hará consultando siempre al primer Jefe activo del Cuerpo de Bomberos.

Dado en Panamá, a los trece días del mes de Octubre de mil novecientos diez y seis.

El Presidente,

EUSEBIO A. MORALES.

El Secretario,

Fabrizio A. Arosemena.

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Panamá, 15 de Octubre de 1916.

Publíquese y ejecútase.

RAMON M. VALDES.

Por el Secretario de Gobierno y Justicia,

Héctor Valdés.

Subsecretario.

PODER EJECUTIVO NACIONAL

Secretaría de Gobierno y Justicia

DECRETO NÚMERO 125 DE 1916
(de 10 de Agosto)

Por el cual se hace un nombramiento en la Secretaría de Gobierno y Justicia.

El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales,

Decreta:

Artículo único. Nómbrase en propiedad, Oficial Tercero de la Sección Primera, de la Secretaría de Gobierno y Justicia al señor Gilberto Percell.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a primero de Agosto de mil novecientos diez y seis.

BELISARIO PORRAS
El Secretario de Gobierno y Justicia,
Juan B. Soar

DECRETO NÚMERO 126 DE 1916
(de 8 de Agosto)

por el cual se hace un nombramiento en la Agencia Postal de la ciudad de Colón.

El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales,

Decreta:

Artículo único. Declárase insubstituente el nombramiento hecho en el señor Florencio Fajardo para el puesto de Cartero de la Agencia Postal de Colón y designase al señor Abraham Sánchez para que lo reemplace.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los ocho días

6488

GACETA OFICIAL

del mes de Agosto de mil novecien-
tos diez y seis.

BELISARIO PORRAS

El Secretario de Gobierno y Jus-
ticia.

Juan B. Sosa

DECRETO NUMERO 127 DE 1916

(de 8 de Agosto)

por el cual se hace una promoción y
un nombramiento en la Oficina de
Registro Público

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales.

Decreta:

Artículo único. Para llenar la va-
cante de Oficial Escribiente de la
Oficina de Registro Público ocasiona-
da con motivo de la renuncia del se-
ñor Alfonso Guzmán R., promuévese
a dicho puesto al señor Clemente Ra-
mos R. y nóbrase al señor Floren-
cio E. Delgado Oficial Escribiente
Supernumerario de la misma Ofi-
cina, puesto que venia desempeñando
el promovido señor Ramos.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los ocho días
del mes de Agosto de 1916.

BELISARIO PORRAS

El Secretario de Gobierno y Jus-
ticia.

Juan B. Sosa

DECRETO NUMERO 128 DE 1916

(de 12 de Agosto)

por el cual se hace un nombramiento
en la Circunscripción de San Blas.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales.

Decreta:

Artículo único. Por renuncia que
ha presentado el señor Camilo Vi-
talobos, del puesto de Agente de la
Policía Colonial, nóbrase en su re-
emplazo al señor Carlos de Sedas.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los doce días
del mes de Agosto de mil novecientos
diez y seis.

BELISARIO PORRAS

El Secretario de Gobierno y Jus-
ticia.

Juan B. Sosa

DECRETO NUMERO 129 DE 1916

(de 12 de Agosto)

por el cual se fijan derechos para
la explotación de bosques en la Cir-
cunscripción de San Blas y se re-
forman los Decretos números 68 y
185 de 1915.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales.

Decreta:

Artículo 1.º. Fíjase en dos balboas
cincuenta centésimos (B. 2.50) el de-
recho mensual para la explotación de
bosques en la Circunscripción de
San Blas, el cual comenzará a hacer-
se efectivo desde el primero de Sep-
tiembre veniente.

Artículo 2.º. Quedan reformados por
el presente, los Decretos números 68
y 185 de 1915.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los doce días
del mes de Agosto de mil novecien-
tos diez y seis.

BELISARIO PORRAS

El Secretario de Gobierno y Jus-
ticia.

Juan B. Sosa

Corte Suprema de Justicia

SENTENCIAS

de 1.ª y 2.ª instancias dictadas en
el juicio sobre validez o nulidad del
Acuerdo número 2, de 17 de Dicie-
mbre de 1916, expedido por el Consejo
Municipal de Panamá

JUZGADO DEL CIRCUITO. — Pana-
má, Julio 22 de mil novecientos
diez y seis.

VISTOS: El Consejo Municipal del
Distrito de Panamá expidió en fe-
cha diez y siete de Diciembre de
mil novecientos quince, el Acuerdo
número dos disponiendo en su parte
resolutiva "que los empleados subal-
ternos de las oficinas municipales
cuyo nombramiento corresponda a
los Jefes respectivos por delegación
del Concejo y en virtud de facultad
conferida por la Ley sobre régimen
político y municipal no empezarán a
ejercer sus funciones mientras el
Concejo no haya aprobado el respec-
tivo nombramiento;" y "que cuando
el nombramiento sea improbo por
el Concejo, se comunicará al siguien-
te día al empleado que lo hizo y si
este no hubiere hecho un nuevo
nombramiento que pueda ser conside-
rado en la próxima sesión ordinaria,
procederá a hacerlo el Concejo".
Tal acuerdo fue pasado al señor Al-
calde del Distrito para su sanción, y
ese funcionario lo objetó por ilegal e
inconveniente pero tuvo que sancio-
narlo en virtud de insistencia del
Concejo.

Pasado ese Acuerdo al Poder Eje-
cutivo Nacional, fué suspendido en
sus efectos por resolución de tres de
Febrero del año actual, por conside-
rarse "que el hecho de atribuirse al
Concejo la facultad de aprobar o
improbar los nombramientos de los
empleados subalternos de las Ofi-
cinas Municipales equivale a asumir la
facultad de hacer tales nombramien-
tos, lo cual es contrario a las Le-
yes, pues como ya se ha dicho en
resolución número 76 de 26 de Julio
y 129 de 5 de Noviembre últimos,
la especial es la facultad que el
inciso 5.º del artículo 115 del Códi-
go Político y Municipal confiere a los
Concejos para nombrar a los emplea-
dos, cuya creación les corresponda,
como la que el ordinal 6.º del artícu-
lo 136 del mismo Código confiere a
los Alcaldes para nombrar y remover
libremente a los empleados de sus
oficinas, y como la que el artículo 83
de la Ley 58 de 1904 da a los Jue-
ces Municipales al disponer que, en
cada Juzgado tendrá un Secretario y
el personal que fije el Concejo, em-
pleados que serán de libre nombramien-
to y remoción del Juez; con las
circunstancias de que la primera
de las citadas disposiciones legales
no puede prevalecer sobre las dos
últimas en vista de lo que para estos
casos establece la regla 2.ª del ar-
tículo 6.º de la Ley 57 de 1887".

En virtud de tal suspensión corres-
ponde al Poder Judicial la exequi-
bilidad o inexecutabilidad de tal Acuer-
do, y como parte del pronunciamiento
del fallo respectivo se han cumplido
todas las reglas de procedimiento que
marca el artículo 129 de la Ley 14 de
1909, se pasó a verificarlo teniendo en
cuenta las siguientes cuestiones:

El Acuerdo que se examina peca
de nulidad por infringir la Consti-
tución, la leyes, actos, decretos o re-
glamentos del Poder Ejecutivo, o a
las disposiciones legales de corpora-
ciones facultadas para dictarlas pa-
ra que se cumplan en la República
o en más de un distrito.

Los Concejos Municipales tienen
facultad de crear empleos y nombrar
a los empleados cuyas creaciones les
corresponda conforme a las leyes,
con excepción de los Policias cuyo
nombramiento corresponde en cada
Municipio a los Alcaldes como Jefes
del Ramo; a los Jueces Municipales

corresponde el nombramiento de los
empleados subalternos, y al Alcalde
del Distrito los de su Oficina, todos
con entera independencia los unos de
los otros, de modo que ni el Concejo
puede intervenir en los nombramien-
tos que hagan los Jueces y Alcaldes
Municipales ni éstos en los que el
Concejo y ellos hagan. De modo
que al disponer el Consejo Municipal
de Panamá que los nombramientos
de empleados subalternos que hagan
los Jefes de oficinas municipales,
para que puedan surtir efectos lega-
les, tienen que ser revisados por el
Consejo Municipal, se extralimitó en
sus funciones legislativas y por en-
de de Acuerdo de que se trata, es
completamente nulo porque afecta
disposiciones legales contenidas en
el Código Político y Municipal. Los
artículos que infringe ese Acuerdo
son: ordinal 6.º del artículo 136 de la
Ley 1909, y el artículo 83 de la
Ley 58 de 1904.

Sosteniendo la ilegalidad de ese
Acuerdo se expresa así el señor
Agente del Ministerio Público:

"Señor Juez Primero del Circuito:

Al evacuar mi Vista en este juicio
sobre validez o nulidad del Acuerdo
número 2 de este año, expedido por
el Consejo Municipal del Distrito Ca-
pital, comencé por hacerle presen-
te que si pedí que se trajera a los
autos copia de las Resoluciones Eje-
cutivas números 76 y 129, de 26 de
Junio y 25 de Noviembre del año pa-
sado, fue por vía de ilustración y no
porque las creyese necesarias para la
decisión de este negociado.

Tuvo por objeto mi solicitud cono-
cer el concepto del Jefe del Poder
Ejecutivo sobre asuntos análogos al
presente, y ver cuáles de sus argu-
mentos eran atendibles para utilizar-
los en apoyo de mi opinión, derecho
que usted no podía negarme y que
sin embargo lo hizo, sin duda, por
no conocer el alcance de mi solici-
tud.

Esto sentado, paso a ocuparme del
negocio en lo sustancial. Transcri-
biré para mayor claridad la parte dis-
positiva del Acuerdo en examen que
dice así:

"Artículo 1.º.—Los empleados su-
balternos de las Oficinas Municipa-
les cuyo nombramiento corresponda
a los Jefes respectivos por delega-
ción del Concejo y en virtud de fa-
cultad conferida por la Ley sobre
régimen político y municipal, no em-
pezarán a ejercer sus funciones
mientras el Concejo no haya apro-
bado sus respectivos nombramien-
tos."

"Artículo 2.º.—Cuando el nombra-
miento sea improbo por el Concejo,
se comunicará la improbación al
siguiente día al empleado que lo hi-
zo y si éste no hubiere hecho un nue-
vo nombramiento que pueda ser con-
siderado en la próxima sesión ordi-
naria, procederá a hacerlo el Conce-
jo."

El Poder Ejecutivo, por el órga-
no de la Secretaría de Gobierno y
Justicia objetó el Acuerdo en refe-
rencia, según resolución que se dice
letra el número 12 de 3 de Febrero
de este año, porque estima "que el
hecho de atribuirse el Concejo la
facultad de aprobar o improbar los
nombramientos de los empleados su-
balternos en las oficinas municipa-
les equivale a asumir la facultad de
hacer tales nombramientos, lo cual
es contrario a las leyes, pues como
ya se ha dicho en resolución número
76 de 26 de Junio y 129 de 5 de No-
viembre últimos (por las cuales se
suspendió la ejecución de análogos
acuerdos expedidos por los Concejos
de Bocas del Toro y Colón), tan es-
pecial es la facultad que el inciso 5.º
del Artículo 115 del Código Político
y Municipal confiere a los Concejos
para nombrar a los empleados cuya
creación les corresponda, como la que
el ordinal 6.º del Artículo 136 del

misimo código confiere a los Alcaldes
para nombrar y remover libremente
a los empleados de sus oficinas y re-
mo la que el Artículo 83 de la Ley
58 de 1904 da a los Jueces Municipa-
les al disponer que cada Juzgado ten-
drá un Secretario y el personal que
fije el Concejo, empleados que serán
de libre nombramiento y remoción
del Juez; con la circunstancia de que
la primera de las citadas disposicio-
nes legales no puede prevalecer so-
bre las dos últimas en vista de lo
que para estos casos establece la re-
gla 2.ª del Artículo 5.º de la Ley
57 de 1887.

El inciso 5.º del Artículo 115 del
Código Político y Municipal artícu-
lo que determina las atribuciones de
los Concejos Municipales, reconoce a
éstos la facultad de "nombrar a los
empleados cuya creación les corres-
ponda conforme a las leyes, con ex-
cepción de los de Policía los cuales
serán nombrados en cada Municipio
por el Jefe del Ramo"

Y el artículo 220 del mismo cuer-
po de leyes, conformándose con la
disposición exterior, establece que
"los destinos públicos se proveen
por la autoridad que en cada caso
designen las leyes, acuerdos o regla-
mentos. En caso de silencio o du-
da, regirán las reglas siguientes: si
el destino fuere del orden nacional,
lo proveerá el Presidente de la Re-
pública, y el del orden Municipal el
Alcalde del Distrito.

Ahora bien, lo que hay que averi-
guar es si la facultad que se arro-
ga al Consejo Municipal de Panamá,
en el Acuerdo que se examina, refe-
rente a la aprobación o improbación
de los nombramientos de empleados
subalternos de las oficinas municipa-
les, hechos por los Jefes de las
mismas, está dentro de la órbita de
sus atribuciones, y si ello es legal o
no.

A mi juicio, al disponer tal cosa
el Concejo, no ejercita propiamente
la facultad que le otorga el ordinal
5.º del Artículo 115 del Código Po-
lítico y Municipal, pues una cosa es
hacer el nombramiento de un em-
pleado, y otra ratificarlo o impro-
barlo. La forma en que está el or-
dinal 10.º del Acuerdo se presta in-
cuestionablemente al abuso, porque
basta que el empleado nombrado no
sea del agrado del Concejo para que
éste objete el nombramiento, aunque
no existan para ello motivos de or-
den legal.

No indicando el Acuerdo cuáles
son los motivos por los cuales el
Concejo podría objetar los nombra-
mientos que hiciesen los Jefes de ofi-
cinas municipales, claro está que sin
razón justificativa se vorían priva-
dos no pocos ciudadanos del derecho
de ejercer empleos públicos, lo
cual sería contrario a lo que dispo-
ne el artículo 209 del Código citado,
que dice así:

"Pueden ser nombrados para los
destinos públicos de mando y juris-
dicción todos los ciudadanos en ac-
tual ejercicio, menos cuando la Con-
stitución o las Leyes exijan determi-
nados requisitos y cualidades, o es-
tablezcan prohibiciones determina-
das."

"Para los demás empleos no se ne-
cesita otro requisito que el nombra-
miento por quien corresponde."

El inciso segundo de la disposi-
ción transcrita, se conforma perfec-
tamente con la parte primera del ar-
tículo siguiente, el 210 según el cual
"La facultad de conferir empleos
comprende la de proveerlos en pro-
piedad o interinidad."

Por consiguiente, al nombrar los
Jefes de las oficinas municipales a
sus empleados subalternos, sea que
la facultad de emplearlos la deriven
de la Ley o por delegación del Con-
cejo, mediante Acuerdo, los nombra-
mientos hechos por ellos no tienen
por qué estar sujetos a ulterior revi-

GACETA OFICIAL

1489

siem, pues este requisito se opone a las disposiciones anteriormente extractadas del Código Político y Municipal.

Juzgo, pues, en conclusión que el Acuerdo materia de este juicio no puede tener vida por ilegal.

C. L. Segundo.

Ahora, como el suscrito Juez abunda en las mismas consideraciones y llega a la misma conclusión del Ministerio Público, no puede menos que decretar como en efecto decreta la nulidad del Acuerdo número 2 de 1915, de 17 de Diciembre, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, basado en lo que dispone el artículo 126 de la Ley 14 de 1909.

Lease, cópese, notifíquese y consúltese esta providencia con la H. Corte Suprema de Justicia.

E. Fernández Jaén.

Erasmo Méndez.

Corte Suprema de Justicia. — Panamá, Agosto veintiocho de mil novecientos diez y seis.

En Acuerdo número 19 de esta fecha, se aprobó el siguiente proyecto de sentencia presentado por el Magistrado señor Lombardi:

VISTOS: El Juez Primero de este Circuito consulta la siguiente sentencia:

"El Consejo Municipal del Distrito de Panamá, expidió en fecha diez y siete de Diciembre de mil novecientos quince, el Acuerdo número dos disponiendo en su parte resolutoria que los empleados subalternos de las oficinas municipales cuyo nombramiento correspondía a los Jefes respectivos por delegación del Concejo y en virtud de facultad conferida por la Ley sobre régimen político y municipal, no tendrían el ejercicio de sus funciones mientras el Concejo no haya aprobado el respectivo nombramiento; y que cuando el nombramiento sea improbadamente por el Concejo, se comunicará la improbabación al siguiente día al empleado que lo hizo y si éste no hubiera hecho un nuevo nombramiento que pueda ser considerado en la próxima sesión ordinaria, procederá a hacerlos al Concejo. Tal Acuerdo fue pasado al señor Alcalde del Distrito, para su sanción, y ese funcionario lo objetó por ilegal e inconveniente pero tuvo que sancionarlo en virtud de la insistencia del Concejo.

"Pasado ese Acuerdo al Poder Ejecutivo Nacional, fue suspendido en sus efectos por resolución de tres de Febrero del año actual, por considerarse que el hecho de atribuirse al Concejo la facultad de aprobar o improbadar los nombramientos de los empleados subalternos de las oficinas municipales equivale a asumir la facultad de hacer tales nombramientos, lo cual es contrario a las leyes, pues como ya se ha dicho en resolución número 76 de 26 de Julio y 129 de 5 de Noviembre últimos, tan especial es la facultad que el inciso 50. del Artículo 115 del Código Político y Municipal confiere a los Concejos para nombrar a los empleados cuya creación les corresponda, como la que el ordinal 60. del artículo 136 del mismo Código confiere a los Alcaldes para nombrar y remover libremente a los empleados de sus oficinas, y como la que el artículo 83 de la Ley 58 de 1904 da a los Jueces Municipales al disponer que cada Juzgado tendrá un Secretario y el personal que fije el Concejo, empleados que serán de libre nombramiento y remoción del Juez, con las circunstancias de que la primera de las citadas disposiciones legales no puede prevalecer sobre las dos últimas en vista de lo que para estos casos establece la regla 2a. del artículo 50. de la Ley 57 de 1887.

En virtud de tal suspensión corresponde al Poder Judicial decretar la exequibilidad o inexecutableidad de tal Acuerdo, y como para el pronunciamiento del fallo respectivo se han cumplido todas las reglas de procedimiento que marca el artículo 129 de la Ley 14 de 1909, se pasa a verificarlo teniendo en cuenta la siguiente cuestión:

El Acuerdo que se examina peca de nulidad por infringir la Constitución, las leyes, actos, decretos del Poder Ejecutivo, o a las disposiciones legales de corporaciones facultadas para dictarlas para que se cumplan en la República o en más de un Distrito.

"Los Consejos Municipales tienen facultad de crear empleos y nombrar a los empleados cuyas creaciones les corresponda conforme a las leyes; con excepción de los de Policía cuyo nombramiento corresponde en cada Municipio a los Alcaldes como Jefes del Ramo; a los Jueces Municipales les corresponde el nombramiento de los empleados subalternos; y al Alcalde del Distrito los de su Oficina, todos con entera independencia los unos de los otros, de modo que ni el Concejo puede intervenir en los nombramientos que hagan los Jueces y Alcaldes Municipales, ni éstos en los que ellos y el Concejo hagan. De modo que al disponer el Consejo Municipal de los empleados subalternos que hagan los Jefes de Oficinas Municipales para que puedan surtir efectos legales tienen que ser revisados por el Consejo Municipal, se extralimitó en sus funciones legislativas y por ende el Acuerdo de que se trata es completamente nulo por que afecta disposiciones legales contenidas en el Código Político y Municipal.

Los artículos que infringe ese Acuerdo son: ordinal 60. del artículo 136 de la Ley (sic) 1909 y el artículo 83 de la Ley 58 de 1904.

"Sosteniendo la ilegalidad de ese Acuerdo se expresa así el señor Agente del Ministerio Público:

"Señor Juez Primero del Circuito:

Al evacuar mi Vista en este juicio sobre validez o nulidad del Acuerdo número 2 de este año, expedido por el Consejo Municipal del Distrito Capital, comencé por hacerle presente que si pedí que se trajera a los autos copia de las Resoluciones ejecutivas números 76 y 129 de Julio y 5 de Noviembre del año pasado, fue por vía de ilustración y no porque las creyese necesarias para la decisión de este negocio.

"Tuvo por objeto mi solicitud conocer el concepto del Jefe del Poder Ejecutivo sobre asuntos análogos al presente, y ver cuáles de sus argumentos eran atendibles para utilizarlos en apoyo de mi opinión, derecho que Ud. no podía negarme y que sin embargo lo hizo, sin duda por no conocer el alcance de mi solicitud.

"Esto sentado paso a ocuparme del negocio en lo sustancial. Transcribiré para mayor claridad la parte dispositiva del Acuerdo en examen que dice así:

"Artículo 10.—Los empleados subalternos de las oficinas municipales cuyo nombramiento correspondía a los jefes respectivos por delegación del Concejo y en virtud de facultad conferida por la Ley sobre régimen político y municipal no empezarán a ejercer sus funciones mientras el Concejo no haya aprobado el respectivo nombramiento.

"Artículo 20.—Cuando el nombramiento sea improbadamente por el Concejo, se comunicará la improbabación al siguiente día al empleado que lo hizo y si éste no hubiera hecho un nuevo nombramiento que pueda ser considerado en la próxima sesión ordinaria, procederá a hacerlos al Concejo.

En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

"El Poder Ejecutivo por órgano de la Secretaría de Gobierno y Justicia objetó el Acuerdo en referencia, según resolución que se dice lleva el número 12 de 3 de Febrero de este año, porque estima que el hecho de atribuirse al Concejo la facultad de aprobar o improbadar los nombramientos de los empleados subalternos de las oficinas municipales, equivale a asumir la facultad de hacer tales nombramientos, lo cual es contrario a las leyes, pues como ya se ha dicho en resolución número 76 de 26 de Julio y 129 de 5 de Noviembre últimos (por las cuales se suspendió la ejecución de análogos acuerdos expedidos por los Concejos de Bocas del Toro y Colón) tan especial es la facultad que el inciso 50. del Artículo 115 del Código Político y Municipal confiere a los Concejos para nombrar a los empleados cuya creación les corresponda, como la que el ordinal 60. del Artículo 136 del mismo Código confiere a los Alcaldes para nombrar y remover libremente a los empleados de sus oficinas y como la que el artículo 83 de la Ley 58 de 1904 da a los Jueces Municipales al disponer que cada Juzgado tendrá un Secretario y el personal que fije el Concejo, empleados que serán de libre nombramiento y remoción del Juez, con la circunstancia de que la primera de las citadas disposiciones legales no puede prevalecer sobre las dos últimas en vista de lo que para estos casos establece la regla 2a. del artículo 50. de la Ley 57 de 1887.

"El inciso 50. del Artículo 115 del Código Político y Municipal, artículo que determina las atribuciones de los Concejos Municipales, reconoce a éstos la facultad de nombrar a los empleados cuya creación les corresponda conforme a las leyes, con excepción de los de Policía los cuales serán nombrados en cada Municipio por el Jefe del Ramo.

"El Artículo 220 del mismo cuerpo de leyes, conformándose con la disposición anterior, establece que los destinos públicos se proveen por las leyes, acuerdos o reglamentos. En caso de silencio o duda regirán las reglas siguientes: si el destino fuere del orden nacional, lo proveerá el Presidente de la República y si del orden municipal el Alcalde del Distrito.

"Ahora bien: lo que hay que averiguar es si la facultad que se arroga el Consejo Municipal de Panamá, en el Acuerdo que se examina, referente a la aprobación o improbabación de los nombramientos de empleados subalternos de las oficinas municipales, hechos por los Jefes de las mismas, está dentro de la órbita de sus atribuciones y si ello es legal o no.

"A mi juicio, al disponer tal cosa el Concejo no ejercita propiamente la facultad que le otorga el ordinal 50. del Artículo 115 del Código Político y Municipal, pues una cosa es hacer el nombramiento de un empleado, y otra ratificarlo o improbadarlo.

"La forma en que está redactado el ordinal 10. del Acuerdo se presta incontestablemente al abuso, porque, basta que el empleado nombrado no sea del agrado del Concejo para que éste objeté el nombramiento, aunque no existan para ello motivos de orden legal.

"No indicando el Acuerdo cuáles son los motivos por los cuales el Concejo podría objetar los nombramientos que hicieran los jefes de oficinas municipales, claro está que sin razón justificativa se verían privados no pocos ciudadanos del derecho de ejercer empleos públicos en el Distrito, sin causa justificativa, lo cual sería contrario a lo que dispone el Artículo 209 del Código citado que dice así:

"Pueden ser nombrados para los

destinos públicos de mando y jurisdicción todos los ciudadanos en actual ejercicio, menos cuando la Constitución o las leyes exijan determinados requisitos y cualidades o establezcan prohibiciones determinadas.

"Para los demás empleos no es necesario otro requisito que el nombramiento por quien corresponde.

"El inciso segundo de la disposición transcrita, se conforma perfectamente con la parte primera del artículo siguiente, el 210 según el cual, la facultad de conferir empleos comprende la de proveerlos en propiedad o interinidad.

"Por consiguiente, al nombrar los Jefes de las oficinas municipales a sus empleados subalternos, sea que la facultad de nombrarlo la derive de la Ley o por delegación del Concejo, mediante Acuerdo, los nombramientos hechos por ellos no tienen por qué estar sujetos a ulterior revisión pues ese requisito se opone a las disposiciones anteriormente extractadas del Código Político y Municipal.

Juzgo, pues, en conclusión que el Acuerdo, materia de este juicio no puede tener vida por ilegal.

(Fdo.) C. L. Segundo.

Ahora, como el suscrito Juez abunda en las mismas consideraciones y llega a la misma conclusión del Ministerio Público, no puede menos que decretar como en efecto decreta la nulidad del Acuerdo número 2 de 1915, de 17 de Diciembre, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, basado en lo que dispone el Artículo 126 de la Ley 14 de 1909.

El Procurador General de la Nación opina de este modo:

"Se ha considerado que este Acuerdo contraviene disposiciones legales y al efecto fue anulado por sentencia de 22 de Julio de 1916. —Mi opinión es la misma que di en mi Vista de 13 de Enero de este año, con referencia al Acuerdo número 23 de 1915 expedido por el Concejo de Colón, es a saber: si el Concejo tiene derecho de nombrar tales o cuales empleados, al delegar esta facultad, no por eso pierde su derecho, esto es, puede recobrarlo en cualquier momento y un medio de hacerlo es ratificando los nombramientos hechos en virtud de la delegación; pero si los Jefes de oficinas, a cuyas órdenes están los empleados creados por el Concejo, tienen facultad legal para nombrarlos, entonces no puede el Concejo quitarles ese derecho, porque sería tanto como reformar la ley. —En suma pido que reforme la sentencia en el sentido de declarar válido el Acuerdo con la interpretación que acabo de expresar.

La Corte está de acuerdo con el concepto del señor Procurador, pues en esencia es el mismo que consigné en el fallo de tres de Febrero del año en curso, al decidir sobre la validez o nulidad del Acuerdo número 23 de 1915, expedido, por el Concejo Municipal de Colón.

En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

Declara:

Que es válido el Acuerdo número 2 de 1915, expedido por el Consejo Municipal de Panamá en cuanto se limita a someter a la aprobación del Concejo los nombramientos que hacen ciertos empleados municipales por delegación del mismo Concejo en virtud de facultad conferida por la Ley 14 de 1909.

Notifíquese y devuélvase.

Juan Lombardi. —Heliodoro Patiño. — Samuel Quintero. —Alejandro Rodríguez. —Manuel A. Herrera. — Secretario.

6490

GACETA OFICIAL

AVISOS OFICIALES

AVIS OFICIAL

Secretaría de Hacienda y Tesoro

Se hace saber al público que las nominas o cuentas que se traigan al Despacho para ordenar su pago, no serán recibidas sino en las horas de la mañana de cada día y la entrega de las mismas se hará en las horas de la tarde del día siguiente, o se devolverán con las objeciones del caso si no estuvieren correctas.

El Secretario de Hacienda y Tesoro,

Aurelio Guardia.

REPUBLICA DE PANAMA

Certificado de Sorteo No. 2.

De conformidad con la Escritura mencionada a continuación, la "Farmers' Loan and Trust Company" y William Nelson Cromwell como Fideicomisarios según la Escritura de Fideicomiso otorgada por la República de Panamá, fechada el 2 de Noviembre de 1914, certifican por la presente que en esta fecha los siguientes bonos en oro, con fondo de amortización asegurado y del 5%, fueron sorteados para amortización el 10. de Noviembre de 1916, a 102 1/2%, más el interés devengado, para absorber tan aproximadamente como sea posible, todos los fondos que existen en la actualidad en el Fondo de Amortización:

5 319 593 994 1271 1903
68 322 603 1039 1282 1908
89 364 611 1074 1294 1911
101 371 609 1110 1417 1922
105 385 810 1115 1428 1925
117 389 840 1156 1487 1926
118 480 851 1159 1573 1955
143 468 857 1164 1598 1961
179 478 864 1236 1627 1970
214 519 870 1238 1633 1995
239 529 900 1248 1671 2038
242 529 909 1249 1678 2105
308 574 960 1257 1902

y que dichos bonos cesarán de devengar interés desde el 10. de Noviembre de 1916, de conformidad con las disposiciones contenidas en dicha Escritura de Fideicomiso.

Hecho en triplicado.

"The Farmers' Loan and Trust Co."

Por

W. A. Duncan.

Secret. ayud.

Wm. Nelson Cromwell,

por

Wm. T. Quinn,

Fideicomisario

Fecha, New York 16 de Septiembre de 1916.

EDICTO

El suscrito Administrador de Tierras Baldías e Indultadas de la Provincia de Panamá,

Hace saber:

Que el señor Egrilo Cuadra P., como representante legal del señor Marcelo Llerena, ha solicitado de este Despacho se le adjudique en plena propiedad y a título gratuito, un lote de terreno baldío de diez hectáreas de extensión, situado en el Corregimiento de San Juan de Pequeñ, Distrito de Panamá, y denominado "El Estuero", por medio del memorial que a continuación dice:

"Señor Administrador Provincial de Tierras Baldías e Indultadas de la Provincia de Panamá.

Presente.

En mi carácter de mandatario del señor Marcelo Llerena, vecino de San Juan de Pequeñ, vengo a solicitar de usted la adjudicación gratui-

ta para mi mandante, de DIEZ HECTÁREAS de terreno baldío, ubicadas en el Corregimiento de San Juan de Pequeñ, Distrito de Panamá, y comprendidas dentro de los siguientes linderos:

Por el Norte, con la quebrada denominada "La Loma", por el Sur, con finca del señor Pedro Hernández; por el Este, con montes incultos; y por el Oeste, con finca de Cayetano Llerena.

Fundo esta petición en lo que preceptúa el artículo 25 de la ley 20 de 1913, y acompaño tres declaraciones para acreditar el derecho de mi mandante.

El terreno se llamará "El Estuero".

Panamá, Octubre 9 de 1916.

Egrilo Cuadra P."

Por tanto, y para que sirva de formal notificación, se fija este edicto en lugar visible de esta Administración y en la Alcaldía del Distrito de Panamá, por el término de treinta días hábiles en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 49 de la Ley 20 de 31 de Enero de 1913, para que todo el que se considere lesionado con dicha solicitud, ocurra en tiempo oportuno a hacer valer sus derechos.

Flado en esta Administración, hoy diez y nueve de Octubre de mil novecientos diez y seis, a las diez de la mañana.

El Administrador,

Manuel L. Barriallo.

El Secretario,

Juan B. Polo.

3 vs. 1.

EDICTO

El suscrito Administrador de Tierras Baldías e Indultadas de la Provincia de Panamá,

Hace saber:

Que el señor Egrilo Cuadra P., como representante legal del señor Cayetano Llerena, ha solicitado de este Despacho se le adjudique en plena propiedad y a título gratuito, un globo de terreno baldío de diez hectáreas de extensión, situado en el Corregimiento de San Juan de Pequeñ, Distrito de Panamá, y denominado "El Porvenir", por medio del memorial que a continuación dice:

"Señor Administrador Provincial de Tierras Baldías e Indultadas de la Provincia de Panamá.

Presente.

En mi carácter de mandatario del señor Cayetano Llerena, vecino de San Juan de Pequeñ, vengo a solicitar de usted la adjudicación gratuita para mi mandante de DIEZ HECTÁREAS de terreno baldío, ubicadas en el Corregimiento de San Juan de Pequeñ, Distrito de Panamá, y comprendidas dentro de los siguientes linderos:

Por el Norte, con la quebrada denominada "La Loma"; por el Sur, con el río Chagres; por el Este, con finca de Federico Hernández; por el Oeste, con el camino que conduce del pueblo de San Juan, a la boca del río Pequeñ.

Fundo este pedimento en lo que preceptúa el artículo 25 de la Ley 20 de 1913, y acompaño tres declaraciones para acreditar el derecho de mi mandante.

El terreno se llamará "El Porvenir".

Panamá, Octubre 7 de 1916.

Egrilo Cuadra P."

Por tanto, y para que sirva de formal notificación, se fija este edicto en lugar visible de esta Administración y en la Alcaldía Municipal del Distrito de Panamá, por el término de treinta días hábiles, en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 49 de la Ley 20 de 31 de Enero de 1913, para que todo el que se considere lesionado con dicha solicitud, ocurra en tiempo oportuno a hacer valer sus derechos.

Flado en esta Administración, hoy diez y nueve de Octubre de mil novecientos diez y seis, a las diez de la mañana.

El Administrador,

Manuel L. Barriallo.

El Secretario,

Juan B. Polo.

3 vs. —1

REPUBLICA DE PANAMA

Bonos en oro, del 5%, amortizables en 30 años, con Fondo de amortización asegurado, pagaderos el 10. de Noviembre de 1944

Bonos llamados para la amortización

Se avisa por la presente, de conformidad con los términos de la Escritura de Fideicomiso otorgada por la República de Panamá a "The Farmers' Loan and Trust Company", como Fideicomisarios, con fecha 2 de Noviembre de 1914, que los siguientes bonos en oro del 5%, amortizables en 30 años, con fondo de amortización asegurado, han sido sorteados para ser redimidos, al precio de 102 1/2%, más el interés devengado hasta la fecha de dicha redención, hasta absorber, tan aproximadamente como sea posible, todos los fondos existentes en la actualidad en el Fondo de Amortización:

5 319 593 994 1271 1903
68 322 603 1039 1282 1908
89 364 611 1074 1294 1911
101 371 609 1110 1417 1922
105 385 810 1115 1428 1925
117 389 840 1156 1487 1926
118 480 851 1159 1573 1955
143 468 857 1164 1598 1961
179 478 864 1236 1627 1970
214 519 870 1238 1633 1995
239 529 900 1248 1671 2038
242 529 909 1249 1678 2105
308 574 960 1257 1902

y serán redimidos por medio de dicho Fondo de amortización a dicho precio de 102 1/2%, más el interés devengado a la fecha de dicha redención, por "The Farmers' Loan and Trust Co." Fideicomisario en su oficina, Nos. 16-22, William Street, New York, el 10. de Noviembre de 1916, desde cuya fecha los bonos sorteados cesarán de devengar interés, a pesar de cualquiera indicación en contrario en dichos bonos o en los cupones adheridos.

"The Farmers' Loan and Trust Company"

Por

Edwin S. Marston,

Presidente.

William Nelson Cromwell,

Fideicomisarios.

Fecha, New York, Septiembre 16 de 1916.

AVISO

El Alcalde Municipal del Distrito de Natá,

Hace saber:

Que en poder del señor Francisco González ha sido depositada una yea-

gua colorado oscuro como, de tres años de edad, marcada a fuego, esta culpa del lado de montar con los lleros que se diseñan H.H. y una cetera al revés.

Este semoviente ha sido denunciado como vacante por el señor depositario, quien lo encontró sin dueño conocido en el llano del pueblo de este Distrito.

De acuerdo con el artículo 634 del Código de Policía en General, se fija el presente aviso en lugar público de esta Oficina hoy 8 de Septiembre de 1916; envíese copia de dicho aviso a la Gobernación de esta Provincia para su publicación en la Gaceta Oficial, y a la vez se cita, llama y emplaza al dueño o interesado, para que en el término de treinta días se presente a reclamarla; vencido este plazo será reclamada en subasta pública por el empleado municipal de Hacienda del Distrito.

Nata, Septiembre 8 de 1916.

El Alcalde,

Pedro N. Barrazza

El Secretario,

A. Leytón Uribe.

3 vs. —3

EDICTO

El Administrador de Tierras Baldías e Indultadas de la Provincia de Herrera,

Hace saber:

Que el señor Julián Henríquez ha solicitado de esta Administración, el título gratuito sobre diez hectáreas de terreno de labor, por medio de un memorial que a la letra dice así:

"Señor Administrador Provincial de Tierras Baldías e Indultadas.

Chitré.

El suscrito, mayor de edad, natural y vecino del Distrito de Pesé, a su autoridad pido, que en uso del derecho que me concede el artículo 25 de la Ley 20 de 1913, se sirva adjudicarme gratuitamente en propiedad diez hectáreas de terreno a que tengo derecho como padre de familia. El citado terreno está en jurisdicción de Pesé, dentro de los linderos que se expresan: Norte, camino de Pesé para Macaracas; Sur, quebrada del Banco; Este, río de la Villa; y Oeste, río de Esquiguita. El terreno se denomina "La Viga". Adjunto a esta petición los documentos requeridos por la ley de la materia.

Chitré, Octubre 13 de 1916.

Por ruegos de Julián Henríquez, que no sabe firmar, lo hace el que suscribe.

Ismael Vieta."

Para dar cumplimiento al artículo 49 de la Ley 20 de 1913, se fija este Edicto por 30 días hábiles, en lugar visible de este Despacho, hoy 14 de Octubre de 1916, a las 9 a. m., y otro se remite a la Alcaldía de aquel Distrito con el mismo fin.

El Administrador Provincial de Tierras,

Fco. Villalaz.

E. Thibault.

Secretario.

3 vs. 1.

PER "UNIDAD DE PANAMA"